

DESCONFIANZA Y CONTROL: ONG Y POLITICAEN PERU

Aldo Panfichi—Mariana Alvarado

Introducción

Este artículo parte de la revisión del desarrollo histórico de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el Perú para describir su composición y características, poniendo énfasis en el tipo de relación que estas organizaciones de la sociedad civil tienen con el estado, los partidos políticos y el funcionamiento de la democracia en general. Concentrándonos en las denominadas ONG de incidencia, proponemos la hipótesis de que no obstante la existencia de una larga relación de recelo y animadversión con el poder político, la capacidad de estas organizaciones de influir, fiscalizar y colocar temas de agenda en la esfera pública continúa siendo alta, e importante, por dos razones.

Este recelo desde el poder político hacia las ONG se basa en la resistencia del primero a formas de control, vigilancia y exigencias provenientes de las segundas, especialmente en lo referido a ciertos temas como la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos humanos y el cuestionamiento del modelo socioeconómico y sus resultados. Como respuesta, el gobierno y los partidos políticos intentan tanto desprestigiar a las ONG, como controlarlas a través de mecanismos legales.

Sin embargo, debido al descrédito de los partidos y el sistema político entre los ciudadanos, las acusaciones vertidas por estos contra las ONG de incidencia no tienen en la opinión pública la eficacia esperada. No obstante, sí han logrado instalarse con fuerza en algunos sectores, especialmente en los principales partidos políticos, altos funcionarios del estado, alcaldes y funcionarios de provincias, un sector del empresariado nacional, e incluso grupos políticos radicalizados.

A pesar de este limitado apoyo, el gobierno y los partidos continúan, hasta ahora con poco éxito, en sus intentos de neutralizar la labor de fiscalización, control, e influencia de estas ONG. El hecho de que estos intentos de control no se logren plasmar a plenitud es una muestra de que el trabajo de las ONG es apreciado por un sector de la ciudadanía, de la capacidad de respuesta de estas organizaciones y sus aliados nacionales e internacionales (sociedad civil trasnacional), y de la debilidad y fragilidad del sistema político. No sucede lo mismo con las ONG de desarrollo a las que el estado sí puede cooptar y subordinar sin mayor resistencia o dificultad.

Esta capacidad de resistencia es potenciada por el hecho de que las ONG cuentan con un aliado poderoso como lo es el periodismo y algunos medios de comunicación, que no solo recogen y reproducen en la esfera pública los temas promovidos por estas organizaciones, sino que también convierten a los líderes de las ONG en personajes de influencia política. Muchas veces el periodismo encuentra en las ONG los datos y la información sobre temas de interés público a los que no logra acceder por el recelo del estado o el sector privado, produciéndose entonces una relación de colaboración y necesidad mutua. En un contexto de grave crisis del sistema político, como el derrumbe del fujimorismo, el descrédito de los partidos, y el establecimiento de gobiernos de transición (Paniagua e inicios de Toledo), estos líderes de la sociedad civil pasan a ocupar cargos como altos funcionarios del estado convirtiendo en política pública parte de la agenda de la sociedad civil. Las ONG funcionarían así como una suerte de plataformas desde donde se visibilizan liderazgos considerados virtuosos y honestos que luego pasan al ámbito político. Estos traslados son resistidos y combatidos por los partidos que ven a las ONG como una suerte de competencia desleal, como adversarios que ilegítimamente buscan ganar espacio en el ámbito público.

La animadversión y relación de oposición entre el gobierno y los partidos con las ONG de incidencia continúa y probablemente escalará a un nivel mayor de antagonismo, como muestran los últimos acontecimientos ocurridos en Perú a partir de los conflictos sociales en la Amazonía. Una muestra de este escalamiento son las recientes acusaciones del gobierno de Alan García y sus aliados en el congreso de que las ONG forman parte de una conspiración internacional, ya sea porque reciben fondos y cobertura política de gobiernos rivales (Venezuela) o de fundaciones ambientalistas “que no quieren el desarrollo del país”. No creemos que esta disputa deba ser leída necesariamente como parte de un proceso que debilita la gobernabilidad democrática sino como expresión de la oposición del sistema político a formas de influencia y fiscalización desde la sociedad civil. En ese sentido se trata de una lucha política por definir las premisas básicas y los ámbitos de expresión de la democracia.